

RESOLUCION ADMINISTRATIVA ANH No. 1798/2013
La Paz, 18 de julio de 2013

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El recurso de revocatoria interpuesto por la Estación de Servicio Panamericano (Estación), cursante de fs. 56 a 68 vta. de obrados, contra la Resolución Administrativa ANH No. 789/2012 de 19 de abril de 2012 (RA 789/2012), cursante de fs. 51 a 54 de obrados, emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Agencia), sus antecedentes, las leyes y preceptos legales cuya contravención se acusa, y

CONSIDERANDO:

Que la recurrente interpuso recurso de revocatoria en mérito al argumento principal de que la Agencia formuló cargos por no haber realizado los aportes correspondientes a diversos fondos. Sin embargo, la Estación presentó prueba documental que demostró que los aportes fueron realizados y, consecuentemente la formulación de cargos quedaba desvirtuada. Sin embargo, sin hacer una evaluación y análisis puntual a la prueba presentada, la Agencia procedió a sancionarnos. Llama la atención que al momento de la emisión del Auto de cargos de 19 de septiembre de 2011, la Estación ya había realizado todos los aportes, pero ello no fue considerado al momento de emitir la RA 789/2012.

CONSIDERANDO:

Que mediante Informe Técnico DRC N° 1915/2010 de 28 de septiembre de 2010, cursante de fs. 1 a 2 de obrados, el mismo concluyó que la Estación no ha realizado el depósito al Fondo de Recalificación y Reposición de Cilindros (FRC gnv), y al Fondo de Conversión Vehicular (FCV gnv).

CONSIDERANDO:

Que mediante Auto de 19 de septiembre de 2011, cursante de fs. 3 a 5 de obrados, la Agencia formuló cargos contra la Estación por ser presunta responsable de incumplimiento del Aporte al Fondo de Recalificación y Reposición de Cilindros (FRC gnv), Fondo de Conversión Vehicular (FCV gnv), y Aporte al Fondo de Conversión Vehicular (FCV gnv).

CONSIDERANDO:

Que mediante memorial presentado el 7 de noviembre de 2011, cursante de fs. 6 a 8 de obrados, la Estación contestó el Auto de Cargos de 19 de septiembre de 2011, indicando que conforme a la prueba documental adjunta al presente memorial, cursante de fs. 11 a 42 de obrados, la Estación no incumplió con ningún aporte a la fecha, puesto que estos fueron cancelados como corresponde, por lo que pidió se excluya a la Estación de toda sanción y multa.

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada RA 789/2012, la Agencia resolvió declarar probados los cargos formulados mediante Auto de 19 de septiembre de 2011, por infracción a lo dispuesto por el artículo 20 del D.S. 0448 de 15 de marzo de 2010, imponiendo una sanción pecuniaria de Bs. 85.971,67.

CONSIDERANDO:

Que mediante proveído de 17 de mayo de 2012, cursante a fs. 71 de obrados, esta Agencia admitió el recurso de revocatoria interpuesto por la Estación contra la RA 789/2012, y dispuso la apertura de un término de prueba de diez días, el mismo que fue clausurado mediante proveído de 4 de julio de 2012, cursante a fs. 134 de obrados. Dentro del término de prueba mediante memorial de 12 de junio de 2012, cursante de fs. 73 a 74 de obrados, la Estación presentó prueba cursante de fs. 75 a 131 de obrados.

CONSIDERANDO

Que entrando al análisis de los elementos substanciales se establecen los siguientes aspectos jurídicos fundamentales:

1. La recurrente indicó que la Agencia formuló cargos por no haber realizado los aportes correspondientes a diversos fondos. Sin embargo, la Estación presentó prueba documental que demostró que los aportes fueron realizados y, consecuentemente la formulación de cargos quedaba desvirtuada. Sin embargo, sin hacer una evaluación y análisis puntual a la prueba presentada, la Agencia procedió a sancionarnos. Llama la atención que al momento de la emisión del Auto de cargos de 19 de septiembre de 2011, la Estación ya había realizado todos los aportes, pero ello no fue considerado al momento de emitir la RA 789/2012

Al respecto cabe establecer lo siguiente:

La presunción de inocencia y el derecho a la defensa constituyen derechos fundamentales esenciales que se encuentran consagrados en la Constitución Política del Estado (CPE) y rigen, por lo tanto, en nuestro procedimiento administrativo que prevé como principio propio el del debido proceso. Por lo tanto, el cumplimiento de estas garantías y la aplicación del principio del debido proceso implican que nadie puede ser sancionado administrativamente sin antes haber sido sometido a un debido proceso.

El parágrafo I del artículo 117 de la CPE establece lo siguiente: "Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. ...".

La Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 2341) preceptúa lo siguiente:

"ARTICULO 4° (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La Actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: ... c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso".

"ARTICULO 74° (Principio de Presunción de Inocencia).- En concordancia con la prescripción constitucional, se presume la inocencia de las personas mientras no se demuestre lo contrario en idóneo procedimiento administrativo".

De acuerdo a los citados preceptos legales, en los mismos se consagra el derecho de los administrados al debido proceso, ello implica el derecho a exponer sus pretensiones y defensas, ofrecer y producir pruebas pertinentes, presentar alegatos, y obtener resoluciones fundamentadas.

2. Conforme a lo anterior y de acuerdo a lo anotado ut supra, corresponde determinar si el acto administrativo de instancia (RA 789/2012) constituye un acto perfecto.

El artículo 28 de la Ley N° 2341 establece entre los elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: "b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable". ...e) Fundamento:

Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a

emitir el acto, consignando, además los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo...”.

Los vicios del acto administrativo son los defectos con que este aparece en el mundo del derecho, y que de acuerdo al orden jurídico vigente afectan la perfección del acto, sea en su validez o eficiencia.

Los actos que prescinden de los hechos del caso, cuando el acto desconoce hechos acreditados en el expediente o se funda en hechos o pruebas inexistentes o carece de todos modos de una situación de hecho que los justifique o de la necesaria explicitación o fundamentación de cuáles son esos hechos, el acto es nulo.

En este sentido, Agustín Gordillo en su Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, pág VI-39 dice: “... los jueces intervinientes, poseen, además, la potestad de revocar o anular la decisión administrativa sobre los hechos controvertidos, si ella fuera suficientemente irrazonable, o se apoyara tan sólo en la voluntad arbitraria o en el capricho de los funcionarios, o implicara denegación de la defensa en juicio”.

Nuestra legislación recoge estos postulados a través del artículo 30 inciso d) de la Ley N° 2341 que dispone: “Los actos administrativos serán motivados con referencia a hechos y fundamentos de derecho cuando:....d) Deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa”.

En concordancia con lo anterior el artículo 8, parágrafo I del D.S. N° 27172 preceptúa lo siguiente: “Las resoluciones... decidirán de manera expresa y precisa las cuestiones planteadas y serán fundamentadas en cuanto a su objeto en los hechos, las pruebas y las razones de derecho que les dan sustento”.

En el caso que nos ocupa y conforme se desprende del contenido de la RA 789/2012, se evidencia de manera inequívoca que dicho acto administrativo no ha tomado en cuenta lo sostenido en el mencionado memorial presentado el 7 de noviembre de 2011, ni ha valorado la prueba documental presentada adjunta al citado memorial, tomando en cuenta que el cargo en cuestión se refiere al incumplimiento del Aporte al Fondo de Recalificación y Reposición de Cilindros (FRC gnv), Fondo de Conversión Vehicular (FCV gnv), y Aporte al Fondo de Conversión Vehicular (FCV gnv).

Por todo lo expuesto, resulta cierto y evidente que la citada RA 789/2012 al no haber tomado en cuenta lo indicado y presentado como prueba a través del memorial de 7 de noviembre de 2011, y que hace a la solución del caso, conlleva a que la mencionada RA 789/2012 sea nula (art. 35 de la Ley 2341) por contener un vicio en el elemento esencial del fundamento (art.28 inciso b) y e) de la Ley 2341), afectando así el derecho a la defensa que se tornaría insuficiente para asegurar la vigencia del derecho de defensa y del debido proceso, puesto que al ejercerse dicha defensa sobre un escenario fáctico y difuso, como en el presente caso de autos, el derecho de defensa podría verse menoscabado, lo que constituye además en una violación al derecho de defensa reconocido por la Constitución Política del Estado y al artículo 4 inciso c) de la Ley 2341 que establece el sometimiento pleno a la ley de la actividad administrativa, asegurando a los administrados el debido proceso.

CONSIDERANDO:

Que en la medida en que la Agencia se apartó de los cursos de acción mencionados, su obrar debe reputarse como irregular por vicio en el elemento causa y fundamento del acto administrativo, al carecer la RA 789/2012 del adecuado sustento en los hechos y antecedentes que le sirven de causa, y en el ordenamiento jurídico vigente.

CONSIDERANDO:

Que otros argumentos esgrimidos por la recurrente no son conducentes a la materia objeto del presente recurso de revocatoria, lo que no ameritan mayores consideraciones de orden legal.

CONSIDERANDO:

Que en virtud a lo dispuesto en el artículo 138 del Decreto Supremo No. 29894 de 7 de febrero de 2009, que determinó la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, se emitió la Resolución Administrativa SSDH No. 0474/2009 de 6 de mayo de 2009 y la Resolución Administrativa ANH No. 0475/2009 de 7 de mayo de 2009, mediante las cuales se adecuó el cambio de nombre de la Superintendencia de Hidrocarburos por el de Agencia Nacional de Hidrocarburos.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo Interino de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en ejercicio de las facultades y atribuciones que la ley le confiere, conforme a lo dispuesto por el inciso i) del artículo 10 de la Ley 1600, y conforme a lo dispuesto por el artículo 89 del D.S. 27172,

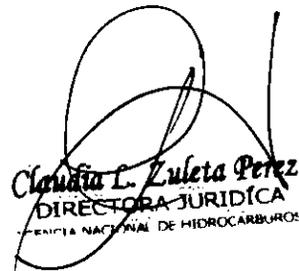
RESUELVE:

ÚNICO.- Revocar la Resolución Administrativa ANH No. 789/2012 de 19 de abril de 2012, de conformidad a lo establecido por el inciso b), párrafo II del artículo 89 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante el D.S. 27172, debiendo la Agencia Nacional de Hidrocarburos de conformidad a lo establecido por el artículo 90 del mencionado cuerpo legal, emitir una nueva resolución administrativa bajo los criterios de legitimidad establecidos en la presente resolución administrativa, ajustándose a lo establecido por la normativa vigente aplicable.

Notifíquese mediante cédula



Ing. Gary Medrano Villamor.MBA.
DIRECTOR EJECUTIVO a.i.
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS



Claudia L. Zuleta Perez
DIRECTORA JURÍDICA
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS